Estudio Comparado de los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres en México y Argentina durante la Última Década: Avances, Tensiones y Desafíos Institucionales

Comparative Study of Advancement Mechanisms for Women in Mexico and Argentina during the Last Decade: Advances, Tensions and Institutional Challenges

Mitzi Cristhell Ruiz Flores[1]*

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7014-4586

Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya[2]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5309-7630

DOI: 10.65299/hnt9gr03

Tipo de artículo: Artículo original

[1] Abogada y especialista en Estudios de Género y Prevención de la Violencia. Profesora del Centro Internacional de Posgrado A.C., servidora pública e integrante del Colectivo Esmeralda

[2] Coordinadora de la Dirección de Fortalecimiento Académico de la Secretaria de Servicios Académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo

RESUMEN

El presente artículo desarrolla un estudio comparado sobre los mecanismos institucionales de adelanto para las mujeres en México y Argentina durante la última década (2015-2025), analizando sus transformaciones normativas, capacidades institucionales, avances en materia de igualdad sustantiva y limitaciones estructurales.

Desde una perspectiva del feminismo institucional y del neoinstitucionalismo feminista, se examinan los organismos responsables de las políticas de género, sus vínculos con los movimientos feministas y las tensiones derivadas de los cambios políticos y económicos de ambos países.

El análisis evidencia que tanto México como Argentina fortalecieron su institucionalidad de género mediante reformas jurídicas, creación de ministerios especializados, transversalización de políticas públicas y expansión de agendas vinculadas con violencia de género, derechos sexuales y representación política. Sin embargo, persisten obstáculos relacionados con presupuestos insuficientes, resistencias conservadoras, fragmentación administrativa y desigualdades territoriales.

El estudio concluye que los mecanismos de adelanto para las mujeres constituyen estructuras fundamentales para la democratización estatal, aunque su consolidación depende de la estabilidad política, la voluntad gubernamental y la presión sostenida de los movimientos feministas.

Palabras clave: institucionalidad de género, feminismo de Estado, políticas públicas, mujeres, México, Argentina.

ABSTRACT

This article develops a comparative study on institutional mechanisms for the advancement of women in Mexico and Argentina during the last decade (2015-2025), analyzing their normative transformations, institutional capacities, progress toward substantive equality, and structural limitations.

From the perspective of institutional feminism and feminist neo-institutionalism, the study examines the agencies responsible for gender policies, their relationship with feminist movements, and the tensions generated by political and economic changes in both countries.

The analysis shows that Mexico and Argentina strengthened their gender institutional frameworks through legal reforms, creation of specialized ministries, mainstreaming of gender policies, and expansion of agendas related to gender violence, sexual rights, and political representation. Nevertheless, significant obstacles remain, including insufficient budgets, conservative resistance, administrative fragmentation, and territorial inequalities.

The study concludes that the advancement mechanisms for women constitute fundamental structures for state democratization, although their consolidation depends on political stability, government will, and sustained pressure from feminist movements.

Keywords: gender institutions, state feminism, public policy, women, Mexico, Argentina.

Fecha de recibido: 11 de septiembre de 2025
Fecha de aceptado: 22 de noviembre de 2025
Fecha de publicación: 30 de junio de 2026

Licencia creative commons:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas América Latina experimentó una transformación significativa en torno a las políticas públicas dirigidas a la igualdad de género. Los procesos de democratización, las conferencias internacionales impulsadas por Naciones Unidas y el fortalecimiento de los movimientos feministas permitieron la creación de mecanismos institucionales orientados al adelanto de las mujeres dentro de las estructuras estatales.

Estos organismos, conocidos como mecanismos para el adelanto de las mujeres, se consolidaron como espacios estratégicos para promover la transversalización de la perspectiva de género, impulsar reformas legales y generar políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades históricas entre hombres y mujeres.

México y Argentina constituyen dos casos paradigmáticos dentro de América Latina por la intensidad de sus transformaciones institucionales y por el protagonismo alcanzado por los movimientos feministas en la agenda pública. Ambos países desarrollaron importantes reformas durante la última década, particularmente en materia de violencia de género, participación política, derechos reproductivos y fortalecimiento institucional. No obstante, los avances no han sido lineales ni homogéneos. Los cambios de gobierno, las crisis económicas y las resistencias culturales evidenciaron la fragilidad de muchos de estos mecanismos.

El objetivo del presente artículo es analizar comparativamente los mecanismos de adelanto para las mujeres en México y Argentina entre 2015 y 2025, identificando avances, limitaciones, tensiones y desafíos institucionales. La hipótesis central sostiene que, aunque ambos países fortalecieron sus estructuras de igualdad de género, las capacidades reales de transformación continúan condicionadas por factores políticos, económicos y culturales que limitan la consolidación de la igualdad sustantiva.

Los principales hallazgos muestran, en primer término, que la institucionalización de la igualdad no siguió una trayectoria lineal ni equivalente en ambos países: mientras México cerró el periodo con una elevación del mecanismo nacional al rango de Secretaría de las Mujeres y con una reforma constitucional que reforzó la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho a una vida libre de violencias y la igualdad salarial, Argentina transitó de la creación de un ministerio especializado a una reducción y reubicación de sus capacidades dentro de estructuras ministeriales de menor jerarquía.

En segundo término, la comparación confirma que la existencia de normas avanzadas no produce por sí misma igualdad sustantiva: la capacidad de coordinación intergubernamental, la continuidad presupuestaria, la producción de información, la profesionalización de las burocracias y la interlocución con organizaciones de mujeres son variables decisivas para convertir derechos formales en resultados.

En tercer término, el estudio identifica un efecto acumulativo de los mecanismos de adelanto: aun en escenarios de reestructuración o retroceso institucional, las reformas legales, las capacidades técnicas instaladas, las redes territoriales, la jurisprudencia y las expectativas sociales creadas elevan el costo político de regresar a situaciones previas de invisibilidad estatal.

Estos hallazgos permiten sostener que la fortaleza de un mecanismo no debe medirse únicamente por su denominación o jerarquía administrativa, sino por su capacidad efectiva para coordinar, transversalizar, presupuestar, evaluar y sostener políticas de igualdad en el tiempo (CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2024).

La lectura comparada se beneficia, además, de la amplia experiencia profesional de las autoras en los campos jurídico, académico, de servicio público, fortalecimiento institucional y estudios de género.

Esa trayectoria acumulada permite interpretar la normativa y los diseños administrativos no

Licencia
CC-By-NC-ND

como piezas aisladas, sino a la luz de los problemas de implementación, coordinación y acceso efectivo a derechos que se observan en la práctica institucional. En términos metodológicos, esta experiencia no sustituye la evidencia documental ni se utiliza como fuente testimonial; funciona como conocimiento situado para formular categorías de análisis, contrastar la coherencia entre diseño y operación y reconocer los puntos en los que una reforma formal puede perder eficacia durante su ejecución.

MARCO TEÓRICO

El análisis de los mecanismos de adelanto para las mujeres se encuentra vinculado con las discusiones desarrolladas desde el feminismo institucional, el feminismo de Estado y el neo institucionalismo feminista. Estas corrientes teóricas sostienen que las instituciones estatales pueden funcionar como espacios de disputa política desde donde se impulsan agendas orientadas a disminuir las desigualdades históricas entre hombres y mujeres (McBride & Mazur, 1995).

Sylvia Walby (1990) plantea que las estructuras patriarcales se reproducen mediante instituciones sociales, económicas y políticas que mantienen relaciones de subordinación de género. Desde esta perspectiva, la creación de organismos especializados para la atención de las desigualdades constituye una estrategia institucional orientada a transformar dichas relaciones estructurales.

Carol Pateman (1995) argumenta que los Estados modernos fueron construidos sobre bases históricamente masculinizadas que excluyeron a las mujeres de la ciudadanía plena. Por ello, las políticas públicas de igualdad representan intentos de corrección democrática frente a estructuras históricas de exclusión.

Catharine MacKinnon (1989) sostiene que el Estado no es neutral frente al género, sino que reproduce relaciones de poder masculinas a través de normas, instituciones y prácticas jurídicas. En consecuencia, los mecanismos de adelanto para las mujeres adquieren relevancia como espacios de resistencia institucional.

En América Latina, las investigaciones de Rodríguez Gustá (2021) destacan que el feminismo de Estado permitió incorporar agendas feministas dentro de las burocracias gubernamentales, particularmente después de las conferencias internacionales impulsadas por Naciones Unidas.

La CEPAL (2001) señala que la institucionalidad de género constituye uno de los principales indicadores de democratización estatal en América Latina, aunque advierte que la mera existencia formal de organismos especializados no garantiza transformaciones profundas.

Por su parte, ONU Mujeres (2024) identifica que los mecanismos de adelanto enfrentan desafíos estructurales relacionados con insuficiencia presupuestaria, limitada autonomía política y débil transversalización de la perspectiva de género.

Karolina Gilas (2024) explica que el neoinstitucionalismo feminista permite analizar cómo las reglas formales e informales dentro de las instituciones continúan reproduciendo desigualdades de género incluso cuando incorporan discursos de igualdad.

Lopreite (2021) sostiene que las políticas públicas de género en América Latina enfrentan tensiones constantes derivadas de cambios de gobierno, crisis económicas y resistencias conservadoras que afectan la continuidad institucional.

Bonder (2022) enfatiza que la institucionalización de la perspectiva de género requiere no solamente reformas legales, sino transformaciones culturales profundas dentro de las estructuras académicas, políticas y sociales.

Roggeband (2021) advierte que el fortalecimiento de los mecanismos de igualdad en América Latina se encuentra estrechamente relacionado con los ciclos políticos progresistas de la región, situación que vuelve vulnerables muchos avances frente a cambios ideológicos.

Licencia
CC-By-NC-ND

La literatura regional subraya que las reformas legales sobre violencia de género requieren capacidades estatales de implementación, coordinación y acceso efectivo a la justicia para producir resultados sostenidos (Lopreite & Rodríguez Gustá, 2021).

Asimismo, autoras como Joan Scott (1996) consideran que el género debe analizarse como una categoría histórica de poder que organiza relaciones sociales y distribuciones desiguales de recursos y oportunidades.

Nancy Fraser (2008) sostiene que las políticas contemporáneas de igualdad requieren articular redistribución económica, reconocimiento cultural y representación política para alcanzar transformaciones estructurales sostenibles.

Finalmente, Marcela Lagarde (2006) destaca que la violencia feminicida en América Latina debe comprenderse como una manifestación extrema de desigualdad estructural, lo que exige respuestas estatales integrales y mecanismos institucionales sólidos.

El estudio de la institucionalidad de género se encuentra estrechamente vinculado con el feminismo de Estado, corriente teórica que analiza la incorporación de agendas feministas dentro de las estructuras gubernamentales. Desde esta perspectiva, los organismos estatales destinados a las políticas de igualdad funcionan como intermediarios entre los movimientos feministas y el aparato burocrático.

El feminismo institucional sostiene que la existencia de agencias gubernamentales especializadas representa un indicador de democratización y reconocimiento estatal de las desigualdades de género. Sin embargo, diversos autores advierten que la mera existencia formal de estas instituciones no garantiza transformaciones profundas si carecen de presupuesto, autonomía política o capacidad de incidencia transversal.

Karolina Gilas señala que el neo institucionalismo feminista permite comprender cómo las instituciones reproducen relaciones de poder generizadas, incluso cuando incorporan discursos de igualdad. De esta forma, los mecanismos de adelanto deben analizarse no solamente desde su diseño jurídico, sino también desde sus prácticas, capacidades reales y articulaciones políticas.

Asimismo, organismos internacionales como ONU Mujeres identifican que los mecanismos para el adelanto de las mujeres enfrentan desafíos estructurales recurrentes en América Latina: marginalidad presupuestaria, inestabilidad administrativa, dependencia política y limitada transversalización.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo comparado, de alcance analítico e interpretativo, sustentado en análisis documental, revisión bibliográfica y examen de políticas públicas implementadas entre 2015 y 2025 en México y Argentina. La comparación se diseñó como una estrategia para identificar no sólo semejanzas normativas, sino variaciones en jerarquía institucional, capacidad de coordinación, continuidad de políticas, articulación territorial y vulnerabilidad frente a cambios de gobierno.

La relevancia del método comparado radica en que permite observar cómo dos países latinoamericanos con compromisos internacionales semejantes y movimientos feministas de alta incidencia produjeron arreglos institucionales diferentes y, por tanto, capacidades estatales también diferenciadas para sostener la agenda de igualdad.

La selección de fuentes siguió criterios de confiabilidad, trazabilidad, pertinencia temática y cercanía con el objeto de estudio. Se priorizaron fuentes primarias y oficiales —constituciones, leyes, decretos, lineamientos, documentos presupuestarios y páginas institucionales de los gobiernos de México y Argentina—, así como documentos de organismos internacionales con mandato especializado, particularmente CEPAL y ONU Mujeres.

Estas fuentes fueron contrastadas con literatura académica sobre feminismo de Estado,

Licencia
CC-By-NC-ND

neoinstitucionalismo feminista, transversalización de género, representación política, violencia contra las mujeres y capacidades estatales.

La triangulación entre normas, documentos institucionales y producción académica disminuye el riesgo de construir el análisis a partir de declaraciones gubernamentales aisladas y permite distinguir entre creación formal de instituciones, permanencia administrativa y capacidad sustantiva de intervención.

El análisis comparativo se estructuró en seis dimensiones: a) evolución y jerarquía institucional; b) capacidad normativa; c) transversalización y coordinación intergubernamental; d) incidencia política y articulación con movimientos de mujeres; e) capacidades operativas, presupuestarias y territoriales; y f) riesgos de regresividad o desinstitucionalización.

Para cada dimensión se elaboraron matrices de contraste y se revisaron hitos del periodo. Se adoptó como criterio de interpretación que un mecanismo de adelanto es más robusto cuando combina mandato jurídico claro, ubicación jerárquica suficiente, recursos, personal especializado, capacidad de coordinación horizontal y vertical, sistemas de seguimiento y canales de participación social. Esta operacionalización permite evitar una comparación meramente nominal entre instituciones y concentrarse en su densidad y capacidad de acción.

La investigación reconoce dos límites. Primero, la comparación documental no permite atribuir causalidad directa entre una institución y variaciones en indicadores complejos como violencia, autonomía económica o acceso a justicia, pues esos resultados dependen de múltiples factores. Segundo, las reestructuraciones administrativas recientes obligan a tratar 2024 y 2025 como años de transición, especialmente en Argentina y México.

Por ello, las afirmaciones sobre fortalecimiento o debilitamiento se formulan en términos de capacidades institucionales observables y no como juicios definitivos sobre resultados de largo plazo. Esta cautela fortalece la validez del análisis y mantiene la discusión dentro de lo que las fuentes permiten sostener.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

México fortaleció significativamente su institucionalidad de género durante la última década. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se consolidó como el principal organismo rector de las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva. Paralelamente, se fortalecieron mecanismos estatales y municipales para transversalizar la perspectiva de género.

Uno de los avances más relevantes fue la consolidación de la paridad política. Las reformas electorales impulsaron la participación de mujeres en cargos legislativos y ejecutivos, convirtiendo a México en uno de los países con mayor representación parlamentaria femenina en el mundo.

No obstante, el principal eje de las políticas públicas mexicanas se centró en la violencia feminicida. La implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres buscó establecer mecanismos extraordinarios de intervención estatal en entidades con altos índices de violencia. Diversos estudios señalaron limitaciones operativas, burocráticas y presupuestales que dificultaron sus resultados.

Argentina, por su parte, experimentó una profunda expansión de la agenda feminista institucional durante la última década. El movimiento “Ni Una Menos”, surgido en 2015, transformó radicalmente el debate público sobre violencia de género y desigualdad estructural.

Uno de los hitos institucionales más importantes fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, considerado un paso histórico dentro de la institucionalización estatal de las agendas feministas. Este ministerio permitió articular políticas nacionales relacionadas con violencia de género, diversidad sexual y autonomía económica.

Licencia
CC-By-NC-ND

Asimismo, Argentina avanzó en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2020, consolidando uno de los cambios normativos más relevantes de América Latina.

Del reconocimiento jurídico a la capacidad de implementación

La comparación muestra que el problema central ya no es sólo la existencia de normas o instituciones, sino su capacidad para modificar prácticas y condiciones de vida. Pateman (1995) recuerda que la ciudadanía formal puede coexistir con restricciones efectivas, y Fraser (2008) exige articular redistribución, reconocimiento y representación. Los avances jurídicos requieren, por tanto, recursos, personal, coordinación y exigibilidad.

En México, esta distancia es visible en las violencias. Las alertas y reformas ampliaron el repertorio jurídico, pero la impunidad confirma que producir normas no equivale a garantizar protección. Lagarde (2006) entiende el feminicidio como expresión de desigualdades estructurales; de ahí que el mecanismo de adelanto deba articular prevención, justicia, salud, educación, protección social e información.

En Argentina, Ni Una Menos y la ampliación de derechos muestran la capacidad de los movimientos sociales para transformar la agenda estatal. El feminismo de Estado describe una relación de cooperación, presión y conflicto entre agencias públicas y demandas externas (McBride & Mazur, 1995; Lopreite & Rodríguez Gustá, 2021), vínculo especialmente relevante durante cambios administrativos.

La comparación también muestra que "mujeres" no constituye una población homogénea. Territorio, ingreso, edad, pertenencia étnica, migración, discapacidad y acceso a servicios producen experiencias diferenciadas. Scott (1996) obliga a examinar relaciones de poder y, en política pública, a preguntar no sólo cuántas mujeres son atendidas, sino cuáles quedan fuera. Los promedios pueden ocultar brechas rurales, económicas, lingüísticas o digitales.

En México, el federalismo vuelve decisiva la ejecución territorial. Una política nacional no asegura acceso equivalente entre zonas metropolitanas, comunidades rurales o territorios indígenas. La rectoría requiere estándares, asistencia técnica, información comparable y recursos. La Secretaría de las Mujeres (2025b) incorpora la territorialización; su eficacia deberá juzgarse por continuidad, coordinación federativa y accesibilidad real.

Argentina enfrenta un desafío semejante por las diferencias provinciales. La expansión de derechos puede encontrar capacidades y prioridades distintas en cada jurisdicción. La fortaleza institucional debe medirse también por una red multinivel capaz de sostener mínimos comunes. CEPAL (2001) advertía que la institucionalidad de género debía penetrar el conjunto de la gestión estatal y no limitarse a oficinas especializadas.

Debe distinguirse, además, visibilidad institucional de capacidad transformadora. La evaluación requiere atender rango, mandato, presupuesto, estabilidad del personal, información, coordinación, presencia territorial, participación y seguimiento. Roggeband (2021) muestra la sensibilidad de las agencias latinoamericanas a los ciclos políticos; esa vulnerabilidad exige salvaguardas que reduzcan su dependencia de coyunturas gubernamentales.

Este criterio evita dos simplificaciones: identificar automáticamente una nueva institución con avance sustantivo o asumir que toda reorganización equivale a desaparición. Debe observarse qué competencias, recursos y equipos permanecen. Argentina permite separar la continuidad jurídica de derechos de la estructura que los impulsa; México permite examinar el proceso inverso, donde mayor jerarquía abre posibilidades que deben demostrarse con resultados.

La comparación no establece una jerarquía simple entre ambos países. Pregunta qué condiciones hacen más resistente una política de

Licencia
CC-By-NC-ND

igualdad. El criterio decisivo no es el nombre del organismo, sino su capacidad para convertir derechos en procedimientos, servicios, presupuestos, información y responsabilidades verificables; desde ahí se examinan jerarquía, presupuesto, violencia, participación, regresividad y sostenibilidad.

Jerarquía institucional y capacidad estatal: una comparación que cambia durante la década

La jerarquía administrativa importa porque determina acceso a los centros de decisión, capacidad de convocar a otras dependencias y posibilidades de incidir en la programación presupuestaria. La literatura sobre feminismo de Estado ha mostrado que las agencias de política para las mujeres obtienen mejores condiciones de incidencia cuando combinan cercanía con el poder ejecutivo, mandato transversal y vínculos estables con organizaciones feministas (McBride & Mazur, 1995).

En América Latina, esta premisa debe matizarse: elevar el rango de una institución puede ampliar su capacidad formal, pero no garantiza por sí sola recursos, continuidad ni cooperación de los sectores responsables de salud, seguridad, educación, trabajo o justicia. Por ello, la institucionalización debe entenderse como una arquitectura de relaciones y no únicamente como la existencia de una oficina especializada.

En México, la transformación del mecanismo nacional al final del periodo analizado es especialmente significativa. El Decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado el 28 de noviembre de 2024 creó la Secretaría de las Mujeres, que inició funciones en 2025 y asumió atribuciones en igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género, prevención y atención de las violencias y sistema de cuidados (Secretaría de las Mujeres, 2025a).

La modificación coincidió con la reforma constitucional publicada el 15 de noviembre de 2024 en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial (Cámara de Diputados, 2024).

La combinación de reforma constitucional y elevación jerárquica produce una oportunidad institucional: la agenda deja de descansar sólo en un instituto especializado y adquiere un asiento directo en el gabinete federal. El desafío es convertir esa mayor jerarquía en coordinación efectiva con entidades federativas y municipios, donde se materializa una parte sustantiva de la atención.

La reorganización mexicana también muestra que fortalecer una institución implica reordenar programas y responsabilidades. Los lineamientos del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres de 2025 señalan que la nueva Secretaría asumió programas previamente operados por INMUJERES y otras instancias, integrando acciones de alcance territorial (Secretaría de Gobernación, 2025).

Esta integración puede reducir duplicidades y favorecer una puerta de entrada más clara para las usuarias, pero también exige preservar experiencia técnica, archivos, redes de colaboración y capacidades locales acumuladas. La transición institucional es exitosa sólo si el cambio de organigrama conserva memoria organizacional y evita interrupciones en servicios esenciales.

Argentina presenta una trayectoria inversa en la parte final del periodo. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019 significó el reconocimiento de la agenda de género en el máximo nivel ministerial y permitió concentrar programas de prevención de violencias, igualdad y diversidad. Sin embargo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 8/2023 transfirió los compromisos, unidades, bienes, personal y créditos del entonces Ministerio al Ministerio de Capital Humano (Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, 2023).

Posteriormente, en mayo de 2024, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fue transferida al Ministerio de

Licencia
CC-By-NC-ND

Justicia mediante los Decretos 450 y 451/2024 (Ministerio de Justicia de Argentina, 2024; Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, 2024). Este recorrido constituye un caso relevante de descenso de jerarquía institucional y fragmentación de competencias.

Desde el neo institucionalismo feminista, la reducción de rango no es un cambio neutro. Las reglas formales distribuyen autoridad, recursos y acceso a la agenda, mientras que las reglas informales determinan quién puede convocar, negociar y bloquear decisiones (Gilas, 2024).

Cuando una política transversal pierde centralidad administrativa, aumenta el riesgo de que sea tratada como asunto sectorial —por ejemplo, exclusivamente como violencia o asistencia a víctimas— y se debiliten dimensiones de autonomía económica, cuidados, participación, salud y transformación cultural.

La experiencia argentina permite observar que la regresividad institucional puede operar sin derogar derechos: basta con reducir la capacidad estatal encargada de coordinarlos, monitorearlos y traducirlos en políticas integrales.

De la igualdad formal a la igualdad sustantiva

La comparación confirma la distancia entre reconocimiento jurídico y transformación material. Pateman (1995) mostró que la ciudadanía moderna se edificó sobre una división sexual que relegó a las mujeres al ámbito privado, mientras Fraser (2008) advirtió que la justicia exige articular redistribución, reconocimiento y representación.

En esa clave, la igualdad sustantiva no puede reducirse a normas antidiscriminatorias: requiere modificar las condiciones que distribuyen de manera desigual tiempo, ingresos, seguridad, voz política y responsabilidades de cuidado.

Los mecanismos de adelanto cumplen precisamente la función de recordar al Estado que la desigualdad de género atraviesa sectores y no puede resolverse desde una sola dependencia.

México ofrece un ejemplo de acumulación normativa en materia de representación. La paridad constitucional y las reformas contra la violencia política en razón de género han contribuido a que la presencia de mujeres en órganos legislativos deje de ser excepcional.

No obstante, la representación descriptiva no elimina automáticamente barreras informales, violencia, distribución desigual de comisiones estratégicas o prácticas partidistas que restringen el ejercicio del poder. Scott (1996) permite comprender este problema al definir el género como una forma primaria de significar relaciones de poder: incorporar mujeres a instituciones previamente masculinizadas modifica la composición, pero la democratización sustantiva exige transformar reglas, prácticas y culturas organizacionales.

En Argentina, la ampliación de derechos sexuales y reproductivos durante el periodo mostró la capacidad de articulación entre movilización social, producción legislativa e institucionalidad estatal. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2020 fue un punto de inflexión regional, pero su implementación, como toda política de derechos, depende de servicios, información, presupuesto, federalismo y capacidad administrativa.

La lección comparada es que un derecho reconocido puede experimentar desigualdades territoriales importantes cuando la provisión depende de sistemas subnacionales heterogéneos. Por ello, los mecanismos nacionales necesitan herramientas de coordinación y seguimiento que hagan visible dónde el derecho existe en la norma pero encuentra barreras en la práctica.

La reforma constitucional mexicana de 2024 amplía el horizonte de la igualdad al incorporar expresamente la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la vida libre de violencias y la erradicación de la brecha salarial como materias constitucionales (Cámara de Diputados, 2024).

Su relevancia radica en que vincula dimensiones tradicionalmente tratadas por

Licencia
CC-By-NC-ND

separado: seguridad, justicia, trabajo y representación. Sin embargo, el cambio constitucional sólo producirá efectos duraderos si se acompaña de armonización legislativa, indicadores, presupuestos y mecanismos de exigibilidad. La experiencia regional demuestra que las normas más ambiciosas pueden coexistir con capacidades de implementación desiguales.

Así, los mecanismos de adelanto deben evaluarse por su capacidad de transformar la igualdad en una obligación operativa para todo el aparato estatal. La transversalización no significa que cada dependencia agregue un apartado de género a sus programas, sino que revise diagnósticos, población objetivo, reglas de operación, indicadores y asignaciones presupuestarias a partir de las desigualdades diferenciadas que enfrentan las mujeres. Bonder (2022) insiste en que la institucionalización exige cambios culturales y organizacionales, no sólo reformas formales.

Esa observación resulta particularmente pertinente en burocracias donde la perspectiva de género puede ser aceptada discursivamente y resistida en las rutinas cotidianas.

Violencias contra las mujeres: entre la especialización y la integralidad

La violencia contra las mujeres constituye el campo donde con mayor claridad se observan los límites de una institucionalidad débil. Lagarde (2006) conceptualizó la violencia feminicida como resultado de relaciones estructurales de desigualdad y de condiciones de impunidad; por ello, la respuesta estatal no puede limitarse a campañas de sensibilización o atención posterior al daño.

Requiere prevención, investigación, sanción, reparación, refugios, salud, autonomía económica, información y coordinación entre órdenes de gobierno. Cuando el mecanismo de adelanto carece de autoridad para articular estos componentes, las políticas tienden a fragmentarse.

En México, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres representa un instrumento extraordinario para visibilizar territorios críticos y obligar a autoridades a adoptar medidas. Su expansión revela, simultáneamente, una mayor capacidad de reconocimiento estatal y la persistencia de violencias graves.

Gutiérrez-Romero (2024) subraya que las reformas penales y jurídicas enfrentan el obstáculo de la impunidad; esto obliga a desplazar la discusión desde la existencia de tipos penales hacia la capacidad efectiva de fiscalías, policías, servicios periciales, poderes judiciales y sistemas de atención. El mecanismo de adelanto puede coordinar y monitorear, pero no sustituye las responsabilidades sectoriales de estas instituciones.

La creación de la Secretaría de las Mujeres en México abre la posibilidad de una coordinación más fuerte, en especial porque sus atribuciones abarcan tanto igualdad como prevención y atención de violencias. Los lineamientos federales de 2025 para la atención integral enfatizan el trabajo coordinado entre órdenes de gobierno y el fortalecimiento de instancias de las mujeres en las entidades federativas (Secretaría de Gobernación, 2025).

El énfasis territorial es relevante: para una mujer que enfrenta violencia, la calidad de la institucionalidad se mide menos por el rango de la oficina federal que por la existencia de una ruta accesible, cercana, gratuita y capaz de responder sin revictimización.

En Argentina, la reubicación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en el Ministerio de Justicia en 2024 mantuvo formalmente competencias de prevención, erradicación y asistencia integral a víctimas (Ministerio de Justicia de Argentina, 2024).

Sin embargo, la concentración de la agenda en el eje de violencia puede producir una reducción conceptual si se separa de las políticas de igualdad, empleo, cuidados y autonomía. La violencia no es un fenómeno aislado de la dependencia económica, la división sexual del trabajo o la desigual distribución del poder.

Licencia
CC-By-NC-ND

Desde Walby (1990), las estructuras patriarcales operan de manera interrelacionada; una política eficaz necesita, por tanto, conservar esa mirada sistémica.

La comparación sugiere que la especialización es necesaria pero insuficiente. Contar con unidades expertas mejora protocolos y acumulación de conocimiento, pero una institucionalidad madura debe evitar que el resto del Estado externalice en esas unidades toda responsabilidad sobre la desigualdad.

La transversalización efectiva combina un órgano rector fuerte con obligaciones concretas para seguridad, justicia, salud, educación, trabajo, hacienda y gobiernos subnacionales. En este sentido, la eficacia del mecanismo depende tanto de lo que hace directamente como de lo que logra que hagan otras instituciones.

Presupuesto, territorio y capacidades burocráticas

Una política de igualdad sin presupuesto suficiente corre el riesgo de convertirse en una declaración programática. ONU Mujeres (2024) identifica entre los problemas recurrentes de los mecanismos de adelanto la limitada autonomía, la insuficiencia de recursos y las dificultades para transversalizar la perspectiva de género.

La cuestión presupuestaria no se agota en conocer cuánto recibe el organismo rector; también exige analizar cuánto destinan los sectores estratégicos a cerrar brechas y qué capacidad existe para seguir el gasto. El presupuesto con perspectiva de género es, por ello, una herramienta de rendición de cuentas y no un simple etiquetado administrativo.

La dimensión territorial es igualmente decisiva. México es una federación con 32 entidades y una gran heterogeneidad municipal; Argentina también presenta fuertes diferencias provinciales. En ambos casos, los derechos nacionales se implementan a través de redes institucionales con capacidades desiguales. Las mujeres rurales, indígenas, migrantes, con discapacidad o residentes en localidades periféricas pueden enfrentar mayores distancias, menor oferta de servicios y barreras lingüísticas o culturales.

Fraser (2008) ayuda a comprender que la justicia requiere atender simultáneamente distribución de recursos y reconocimiento de diferencias; una política homogénea puede reproducir desigualdad si desconoce las condiciones territoriales.

El fortalecimiento de capacidades burocráticas implica personal estable, formación especializada, sistemas de información, protocolos y memoria institucional. Las reestructuraciones frecuentes pueden producir pérdida de equipos técnicos, discontinuidad de bases de datos y ruptura de vínculos con organizaciones sociales.

Este aspecto es especialmente relevante en el caso argentino, donde la transferencia de estructuras entre ministerios durante 2023 y 2024 modificó cadenas de mando y adscripciones administrativas (Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, 2023, 2024). Aun cuando los decretos prevén transferencia de personal, bienes y créditos, la continuidad formal no elimina los costos de coordinación y aprendizaje asociados a una reorganización.

En México, el tránsito de INMUJERES y otras capacidades hacia la Secretaría de las Mujeres también debe observarse desde la continuidad administrativa. El Primer Informe de Labores 2024-2025 reconoce que la creación de la nueva Secretaría requirió transformar plazas, integrar bienes y organizar una nueva estructura (Secretaría de las Mujeres, 2025b).

Este dato es importante porque muestra que elevar el rango institucional no es un acto instantáneo: demanda procesos de transición que deben proteger servicios, programas y experiencia técnica. El éxito de la reforma dependerá de que la mayor jerarquía se traduzca en capacidad instalada y no en una etapa prolongada de ajuste interno.

La profesionalización constituye, finalmente, una garantía frente a los ciclos políticos. Si las

Licencia
CC-By-NC-ND

políticas de igualdad dependen exclusivamente de liderazgos individuales, cada cambio de gobierno puede reiniciar diagnósticos y prioridades. Lopreite (2021) y Roggeband (2021) advierten sobre la vulnerabilidad de las políticas de género ante alternancias y reacciones conservadoras.

La respuesta institucional es construir reglas, servicios civiles, indicadores y redes intergubernamentales que hagan más costoso desmontar capacidades y permitan que los derechos sobrevivan a la rotación política.

Movimientos feministas, participación y legitimidad democrática

Los mecanismos de adelanto no surgieron exclusivamente desde el interior del Estado. Su historia está vinculada con movimientos de mujeres que transformaron problemas considerados privados en asuntos públicos y exigieron instituciones capaces de responder.

El feminismo de Estado estudia precisamente esa relación entre activismo y burocracia: las agencias especializadas pueden funcionar como puentes que traducen demandas sociales en políticas, pero también pueden burocratizar o seleccionar agendas (McBride & Mazur, 1995). La calidad democrática de estos mecanismos depende, por tanto, de mantener canales de interlocución que no reduzcan la participación a consultas simbólicas.

Argentina ofrece un caso emblemático con Ni Una Menos, cuya irrupción en 2015 amplificó la denuncia de la violencia machista y articuló repertorios de movilización que luego se conectaron con demandas de derechos reproductivos, cuidados y autonomía.

La fuerza de esta movilización contribuyó a que la agenda de género adquiriera centralidad política. Sin embargo, la institucionalización nunca elimina el conflicto: cuando cambia la orientación gubernamental, las organizaciones sociales vuelven a desempeñar una función de vigilancia, documentación y defensa de capacidades estatales previamente conquistadas.

En México, la movilización feminista ha sido más territorialmente diversa y se ha expresado en protestas contra feminicidios, desapariciones, violencia sexual, violencia política y falta de acceso a la justicia.

Esa diversidad puede dificultar la existencia de una interlocución nacional unificada, pero también refleja la pluralidad de experiencias de las mujeres en un país federal y socialmente heterogéneo. La Secretaría de las Mujeres enfrenta el reto de construir participación sin homogeneizar voces ni sustituir la autonomía de los movimientos. Una institucionalidad sólida debe poder recibir crítica social y convertirla en información para mejorar políticas.

La legitimidad de los mecanismos también depende de su capacidad para mostrar resultados verificables. Cuando las mujeres perciben que una institución sólo produce discursos, su reconocimiento social disminuye; cuando encuentran servicios, rutas de atención, reformas y capacidad de interlocución, la institución se convierte en un referente de derechos.

Esto explica por qué la desaparición o degradación de un mecanismo puede tener efectos simbólicos que exceden su presupuesto: comunica qué problemas considera prioritarios el Estado y qué actores reconoce como interlocutores legítimos.

La experiencia de las autoras en espacios académicos, jurídicos y de gestión pública permite subrayar un aspecto frecuentemente omitido: la institucionalidad se construye también en prácticas cotidianas de coordinación, seguimiento y resolución de problemas. La calidad de una política depende de que las personas responsables conozcan el marco jurídico, comprendan la perspectiva de género y puedan actuar frente a resistencias organizacionales.

La participación social y la profesionalización burocrática no son dimensiones opuestas; juntas reducen el riesgo de que el mecanismo quede capturado por coyunturas partidistas o se convierta en una estructura meramente ceremonial.

vol. 2, no. 2, enero-junio 2026
ISSN Electrónico 3122-444X
DOI: 10.65299/hnt9gr03
https://ojs.pressmark.net/index.php/revistacipac/es

Licencia
CC-By-NC-ND

Riesgos de regresividad y escenarios ante la desaparición de los mecanismos

El periodo 2015-2025 obliga a incorporar la regresividad institucional como categoría de análisis. Durante años, gran parte de la literatura se concentró en explicar cómo nacían y se fortalecían las agencias de igualdad; la experiencia reciente muestra que también pueden perder jerarquía, presupuesto, personal o atribuciones.

Roggeband (2021) advierte que los avances en igualdad pueden enfrentar procesos de desdemocratización y contestación política. La regresión no siempre ocurre mediante la derogación explícita de derechos; puede presentarse como reorganización administrativa, reducción presupuestaria, eliminación de programas, pérdida de información o debilitamiento de la interlocución social.

Argentina constituye el ejemplo más visible en la comparación. El paso de un ministerio específico a una subsecretaría y su posterior traslado entre ministerios evidencia que la arquitectura estatal puede cambiar con rapidez. Jurídicamente, numerosos derechos permanecen; institucionalmente, la capacidad de coordinarlos puede reducirse.

Esta diferencia es central: los derechos necesitan instituciones que los hagan exigibles y políticas que los vuelvan accesibles. La ausencia de un órgano rector fuerte puede dispersar responsabilidades hasta el punto de dificultar la rendición de cuentas, pues cada dependencia puede atribuir a otra la obligación de actuar.

México muestra, al cierre del periodo, una dirección distinta: la elevación del mecanismo a Secretaría y el fortalecimiento constitucional de la igualdad. Sin embargo, ninguna reforma está exenta de riesgos. Una institución de alto rango puede debilitarse si carece de presupuesto, indicadores, presencia territorial o autonomía técnica.

La comparación con Argentina funciona entonces como advertencia metodológica y política: los avances deben institucionalizarse de forma que su continuidad no dependa exclusivamente de una administración. La creación de obligaciones legales, sistemas de información, redes federales y capacidades profesionales contribuye a construir esa resiliencia.

La pregunta por lo que ocurriría si desaparecieran los mecanismos de adelanto no es retórica. Se perdería un punto de responsabilidad estatal especializado para coordinar la igualdad; disminuiría la capacidad de producir diagnósticos y datos con perspectiva de género; se debilitaría el seguimiento de compromisos internacionales; aumentaría la fragmentación entre sectores y territorios; y las organizaciones de mujeres perderían un interlocutor institucional específico.

Algunas funciones podrían ser absorbidas por otras dependencias, pero la experiencia comparada sugiere que la dispersión reduce visibilidad, coordinación y capacidad de exigir cuentas. MacKinnon (1989) recuerda que el Estado no es neutral frente a relaciones de poder; retirar instrumentos correctivos no devuelve a una situación neutral, sino que deja operar con mayor fuerza desigualdades ya existentes.

Por ello, el debate no debe plantearse como una defensa acrítica de cualquier burocracia de género. Los mecanismos pueden burocratizarse, duplicar funciones o producir resultados insuficientes, y deben ser evaluados.

La alternativa a una institución deficiente, sin embargo, no es suprimir la capacidad estatal especializada, sino reformarla, profesionalizarla, dotarla de recursos, mejorar sus sistemas de evaluación y fortalecer la coordinación.

La desaparición puede eliminar también las condiciones desde las cuales exigir mejoras. En términos democráticos, resulta preferible una institucionalidad perfectible y sometida a escrutinio que un vacío administrativo en el que la igualdad vuelva a depender de voluntades dispersas.

Licencia
CC-By-NC-ND

Evaluación, indicadores y sostenibilidad de los avances

Una dimensión adicional para valorar los mecanismos de adelanto es su capacidad de evaluar resultados y no sólo registrar actividades. Contar talleres, convenios o campañas informa sobre esfuerzo administrativo, pero no necesariamente sobre cambios en acceso a derechos. La evaluación con perspectiva de género requiere indicadores capaces de mostrar brechas, diferencias territoriales y resultados para grupos de mujeres con condiciones diversas.

También exige líneas de base, periodicidad, datos desagregados y mecanismos públicos de seguimiento. ONU Mujeres (2024) ha insistido en que la fortaleza institucional depende de capacidades de monitoreo y transversalización; sin ellas, la política puede mantener visibilidad discursiva sin identificar dónde persisten los principales obstáculos.

En esta materia, la comparación entre México y Argentina sugiere que la continuidad de los sistemas de información es parte de la capacidad estatal. Una reorganización administrativa puede conservar formalmente competencias y, al mismo tiempo, interrumpir series, modificar responsables o dificultar la comparación histórica.

Por ello, cualquier reforma institucional debería incluir reglas explícitas para proteger bases de datos, metodologías, archivos, padrones, indicadores y mecanismos de evaluación. La memoria institucional no es un asunto meramente administrativo: permite saber si una política mejora, se estanca o retrocede y ofrece a la ciudadanía herramientas para exigir rendición de cuentas.

La sostenibilidad también depende de que los avances se distribuyan entre múltiples instituciones. Un mecanismo rector demasiado aislado puede convertirse en una isla especializada; uno con capacidad de coordinación puede incorporar obligaciones de igualdad en hacienda, trabajo, educación, salud, seguridad y justicia.

La transversalización, en este sentido, funciona como una estrategia de resiliencia: cuanto más integradas estén las obligaciones de género en reglas presupuestarias, sistemas de información, protocolos y responsabilidades sectoriales, más difícil será desmantelarlas mediante una sola decisión administrativa. Esto no elimina la necesidad de una autoridad especializada; al contrario, refuerza su papel como coordinadora, evaluadora y garante de coherencia.

Finalmente, la sostenibilidad exige una perspectiva intergeneracional. Los mecanismos de adelanto no sólo responden a demandas presentes; crean condiciones para que niñas y jóvenes ingresen a instituciones, mercados laborales y espacios públicos con expectativas distintas a las de generaciones anteriores. Los avances en representación, educación, derechos reproductivos, reconocimiento de las violencias y autonomía modifican decisiones de vida y horizontes de posibilidad.

Precisamente por ese efecto acumulativo, los retrocesos institucionales pueden producir consecuencias que no se observan de inmediato.

Evaluar los mecanismos requiere entonces combinar resultados de corto plazo con su contribución a una transformación democrática de largo alcance, coherente con la idea de que la igualdad sustantiva es un proceso continuo y no una meta que pueda declararse definitivamente alcanzada.

Los principales avances institucionales desarrollados en México durante la última década permiten observar una transformación significativa en materia de igualdad sustantiva, particularmente en participación política, derechos reproductivos y fortalecimiento normativo, como se observa en el siguiente cuadro comparativo.

Licencia
CC-By-NC-ND

Evaluación, indicadores y sostenibilidad de los avances

Una dimensión adicional para valorar los mecanismos de adelanto es su capacidad de evaluar resultados y no sólo registrar actividades. Contar talleres, convenios o campañas informa sobre esfuerzo administrativo, pero no necesariamente sobre cambios en acceso a derechos. La evaluación con perspectiva de género requiere indicadores capaces de mostrar brechas, diferencias territoriales y resultados para grupos de mujeres con condiciones diversas.

También exige líneas de base, periodicidad, datos desagregados y mecanismos públicos de seguimiento. ONU Mujeres (2024) ha insistido en que la fortaleza institucional depende de capacidades de monitoreo y transversalización; sin ellas, la política puede mantener visibilidad discursiva sin identificar dónde persisten los principales obstáculos.

En esta materia, la comparación entre México y Argentina sugiere que la continuidad de los sistemas de información es parte de la capacidad estatal. Una reorganización administrativa puede conservar formalmente competencias y, al mismo tiempo, interrumpir series, modificar responsables o dificultar la comparación histórica.

Por ello, cualquier reforma institucional debería incluir reglas explícitas para proteger bases de datos, metodologías, archivos, padrones, indicadores y mecanismos de evaluación. La memoria institucional no es un asunto meramente administrativo: permite saber si una política mejora, se estanca o retrocede y ofrece a la ciudadanía herramientas para exigir rendición de cuentas.

La sostenibilidad también depende de que los avances se distribuyan entre múltiples instituciones. Un mecanismo rector demasiado aislado puede convertirse en una isla especializada; uno con capacidad de coordinación puede incorporar obligaciones de igualdad en hacienda, trabajo, educación, salud, seguridad y justicia.

La transversalización, en este sentido, funciona como una estrategia de resiliencia: cuanto más integradas estén las obligaciones de género en reglas presupuestarias, sistemas de información, protocolos y responsabilidades sectoriales, más difícil será desmantelarlas mediante una sola decisión administrativa. Esto no elimina la necesidad de una autoridad especializada; al contrario, refuerza su papel como coordinadora, evaluadora y garante de coherencia.

Finalmente, la sostenibilidad exige una perspectiva intergeneracional. Los mecanismos de adelanto no sólo responden a demandas presentes; crean condiciones para que niñas y jóvenes ingresen a instituciones, mercados laborales y espacios públicos con expectativas distintas a las de generaciones anteriores. Los avances en representación, educación, derechos reproductivos, reconocimiento de las violencias y autonomía modifican decisiones de vida y horizontes de posibilidad.

Precisamente por ese efecto acumulativo, los retrocesos institucionales pueden producir consecuencias que no se observan de inmediato.

Evaluar los mecanismos requiere entonces combinar resultados de corto plazo con su contribución a una transformación democrática de largo alcance, coherente con la idea de que la igualdad sustantiva es un proceso continuo y no una meta que pueda declararse definitivamente alcanzada.

Los principales avances institucionales desarrollados en México durante la última década permiten observar una transformación significativa en materia de igualdad sustantiva, particularmente en participación política, derechos reproductivos y fortalecimiento normativo, como se observa en el siguiente cuadro comparativo.

Licencia
CC-By-NC-ND

Federalismo, cuidados y autonomía económica: agendas que definen la eficacia institucional

El análisis de los mecanismos de adelanto se vuelve incompleto si la igualdad se reduce a representación política y violencia. Una parte decisiva de la desigualdad se produce en la organización social de los cuidados y en la distribución del trabajo remunerado y no remunerado.

Fraser (2008) advierte que la justicia requiere articular redistribución, reconocimiento y representación; esta perspectiva permite comprender por qué una política de igualdad necesita intervenir en las condiciones materiales que limitan la autonomía. Cuando las mujeres concentran responsabilidades domésticas y de cuidado, disponen de menos tiempo para empleo, formación, participación política y descanso. El mecanismo rector debe, por tanto, coordinar políticas laborales, de seguridad social, salud, educación y servicios de cuidado, evitando que la igualdad sea tratada como una agenda aislada.

La creación de la Secretaría de las Mujeres en México incorporó entre sus ámbitos de actuación el sistema de cuidados, lo que amplía el alcance del mecanismo respecto de una concepción centrada exclusivamente en discriminación o violencia (Secretaría de Gobernación, 2025). Esta ampliación es relevante porque reconoce que la autonomía económica y la prevención de violencias están conectadas: la dependencia económica puede dificultar que una mujer abandone una relación violenta, mientras la disponibilidad de servicios públicos de cuidado puede modificar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

La transversalización adquiere aquí un contenido concreto: coordinar decisiones presupuestarias y sectoriales para redistribuir responsabilidades que históricamente fueron asumidas por las familias y, dentro de ellas, de manera desproporcionada por las mujeres.

En Argentina, la agenda integral desarrollada durante la etapa ministerial incluyó dimensiones de igualdad, diversidad, empleo y prevención de violencias. La reducción posterior de jerarquía plantea el riesgo de que esa mirada intersectorial se fragmente. Este punto no implica afirmar que toda política desapareció con la reorganización, sino reconocer que la estructura encargada de reunir dimensiones distintas perdió centralidad.

Desde Walby (1990), las desigualdades patriarcales se sostienen en sistemas que interactúan; por ello, una respuesta concentrada en un solo problema puede atender consecuencias sin modificar las condiciones que las producen. El valor de un mecanismo nacional reside precisamente en su capacidad para mantener conectadas esas dimensiones.

El federalismo agrega complejidad a este desafío. Tanto México como Argentina requieren que las políticas nacionales sean apropiadas y ejecutadas por gobiernos subnacionales con capacidades muy diferentes. La igualdad formal puede coexistir con mapas territoriales de acceso profundamente desiguales.

Una política de cuidados, una ruta de atención a la violencia o un servicio de salud reproductiva puede existir en una capital y ser inaccesible en una comunidad rural. Por ello, el fortalecimiento institucional debe incluir financiamiento, asistencia técnica, estándares mínimos, interoperabilidad de información y evaluación territorial.

El mecanismo nacional no sustituye a las autoridades locales, pero puede reducir desigualdades de capacidad mediante reglas comunes y acompañamiento técnico.

La autonomía económica constituye, en consecuencia, un indicador transversal de la eficacia de las políticas de igualdad. No basta con incrementar la participación laboral si las mujeres permanecen concentradas en empleos precarios, informales o peor remunerados, ni basta con reconocer igualdad salarial si no existen instrumentos para identificar y corregir brechas.

Licencia
CC-By-NC-ND

La reforma constitucional mexicana de 2024 colocó la erradicación de la brecha salarial dentro del marco constitucional (Cámara de Diputados, 2024), lo que refuerza la necesidad de desarrollar mecanismos de medición y cumplimiento. La comparación regional muestra que la igualdad sustantiva exige pasar de la proclamación de derechos a la construcción de capacidades administrativas que los hagan observables y exigibles.

Cuadro 1. Principales avances institucionales en México (2015-2025)

Área	Avances
Participación política	Consolidación de la paridad constitucional
Violencia de género	Expansión de Alertas de Violencia de Género
Derechos reproductivos	Despenalización progresiva del aborto en diversas entidades
Institucionalidad	Creación de la Secretaría de las Mujeres desde 2025
Legislación	Reforma constitucional de 2024 y normas contra violencia política de género

En el caso argentino, las reformas institucionales impulsadas desde 2015 reflejan la creciente influencia del movimiento feminista en la construcción de políticas públicas nacionales orientadas a la protección integral de los derechos de las mujeres y diversidades.

Cuadro 2. Principales avances institucionales en Argentina (2015-2025)

Área	Avances y tensiones
Institucionalidad	Creación del Ministerio en 2019; reducción de jerarquía desde 2024
Derechos reproductivos	Legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2020
Violencia de género	Desarrollo de programas integrales; reestructuración institucional posterior
Participación política	Consolidación de cuotas y paridad
Movimientos feministas	Expansión y alta visibilidad de Ni Una Menos

El análisis comparado entre México y Argentina permite identificar convergencias y divergencias en la estructura institucional, prioridades políticas y obstáculos enfrentados por los mecanismos de adelanto para las mujeres, tal como se sintetiza en el siguiente cuadro.

Dimensión	México	Argentina
Organismo rector al cierre del periodo	Secretaría de las Mujeres	Capacidades reubicadas en estructuras de menor jerarquía; violencia de género en órbita de Justicia durante 2024

Licencia
CC-By-NC-ND

Dimensión	México	Argentina
Eje prioritario	Igualdad sustantiva, violencias, cuidados y transversalización	Derechos integrales durante 2019-2023; mayor sectorialización posterior
Participación política	Alta paridad legislativa	Consolidación de cuotas y paridad
Movilización feminista	Plural y territorialmente diversa	Alta articulación nacional
Obstáculos principales	Violencia, impunidad y brechas territoriales	Crisis económica, polarización y debilitamiento institucional

CONCLUSIONES

El estudio comparado permite concluir que la década 2015-2025 no puede describirse únicamente como una etapa de expansión de la institucionalidad de género. Fue, más precisamente, un periodo de acumulación de derechos y capacidades acompañado por tensiones, reestructuraciones y riesgos de regresividad.

México y Argentina muestran que los mecanismos de adelanto son instituciones políticamente sensibles: pueden ganar jerarquía cuando la igualdad se coloca en el centro de la agenda gubernamental y pueden perderla cuando cambia la orientación del poder ejecutivo. La comparación confirma así la hipótesis del trabajo: las capacidades reales de transformación dependen de condiciones políticas, presupuestarias, territoriales y culturales, además del diseño jurídico.

En México, el cierre del periodo muestra un fortalecimiento formal relevante con la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma constitucional de 2024. Estos cambios elevan la responsabilidad del Estado en igualdad sustantiva, prevención de violencias y brecha salarial, pero su valor histórico dependerá de la capacidad para consolidar una administración profesional, coordinar sectores y órdenes de gobierno y sostener recursos suficientes.

Argentina, en cambio, permite observar el problema de la regresividad institucional: la desaparición del ministerio especializado y la transferencia de sus competencias a estructuras de menor rango no borraron automáticamente los derechos conquistados, pero sí modificaron la capacidad estatal encargada de articularlos y mantenerlos como una agenda transversal.

Para las mujeres, los mecanismos de adelanto han significado ganancias concretas que hoy forman parte del piso democrático: mayor reconocimiento de la violencia como responsabilidad pública; marcos jurídicos contra la discriminación y la violencia política; expansión de la representación; creación de rutas, programas y servicios especializados; incorporación de los derechos sexuales y reproductivos a la agenda estatal; producción de información sobre desigualdades; presupuestos y programas con perspectiva de género; y, sobre todo, la existencia de una autoridad a la que puede exigirse coordinación y rendición de cuentas.

También hemos ganado lenguaje público para nombrar desigualdades antes naturalizadas y capacidad institucional para convertir demandas históricas en obligaciones del Estado. Estas conquistas son incompletas y desiguales, pero modificaron el horizonte de lo socialmente aceptable y de lo jurídicamente exigible.

Si estos mecanismos desaparecen o son vaciados de capacidades, las leyes pueden permanecer formalmente vigentes mientras se debilita la infraestructura que permite ejercerlas.

El riesgo principal es perder coordinación, memoria institucional, equipos especializados, información, seguimiento presupuestario, presencia territorial e interlocución con organizaciones de mujeres.

La igualdad volvería a dispersarse entre dependencias con prioridades distintas y sería más difícil identificar quién debe responder por

Licencia
CC-By-NC-ND

los incumplimientos. El análisis de la década demuestra, por tanto, que la continuidad institucional no es un asunto meramente administrativo: condiciona la posibilidad de traducir derechos reconocidos en respuestas públicas sostenidas.

Por ello, frente a la alternativa entre mecanismos perfectibles y su desaparición, preferimos —como mujeres y como académicas que han observado y trabajado estos procesos— instituciones fuertes, evaluables, transparentes y sujetas a crítica pública.

No se trata de defender burocracias por sí mismas, sino de preservar y mejorar la capacidad del Estado para garantizar derechos. Lo que se ha ganado con décadas de movilización, reforma jurídica y construcción institucional no debe considerarse irreversible.

La democracia sustantiva exige que los mecanismos de adelanto tengan continuidad, recursos, profesionalización, participación social y capacidad real de incidir en todo el aparato estatal. Su permanencia no es un privilegio sectorial: constituye una condición para que la igualdad deje de ser una promesa formal y opere como una responsabilidad pública verificable.

Referencias

1. Bonder, G. (Comp.). (2022). La institucionalización del enfoque de igualdad de género en universidades de América Latina: experiencias, reflexiones y contribuciones para el futuro de la educación superior. FLACSO Argentina / Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología.
2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Diario Oficial de la Federación, 15 de noviembre de 2024.
3. CEPAL. (2001). La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis. Naciones Unidas.
4. CEPAL. (2022). La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. Naciones Unidas.
5. Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Herder.
6. Gilas, K. (2024). Género, instituciones y poder: nuevas tendencias teóricas para el estudio del poder generizado en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 69(251), 191-218. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2024.251.87987
7. Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. Desde el Jardín de Freud, 6, 216-225.
8. Lopreite, D., & Rodríguez Gustá, A. L. (2021). Introducción: Estado, instituciones y políticas públicas con enfoque feminista en el análisis de viejas y nuevas desigualdades de género en América Latina. Revista SAAP, 15(2), 245-255. https://doi.org/10.46468/rsaap.15.2.I
9. MacKinnon, C. A. (1989). Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press.
10. McBride, D. E., & Mazur, A. G. (1995). Comparative State Feminism. SAGE Publications.
11. Ministerio de Justicia de Argentina. (2024, 24 de mayo). La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pasa a la órbita del Ministerio de Justicia. Gobierno de Argentina.
12. ONU Mujeres. (2024). Mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe.
13. Pateman, C. (1995). El contrato sexual. Anthropos.

Licencia
CC-By-NC-ND

14. Poder Ejecutivo Nacional de Argentina. (2023). Decreto de Necesidad y Urgencia 8/2023. Ley de Ministerios. Boletín Oficial de la República Argentina, 10 de diciembre de 2023.
15. Poder Ejecutivo Nacional de Argentina. (2024). Decreto 451/2024. Administración Pública Nacional: transferencia de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género al Ministerio de Justicia. Boletín Oficial de la República Argentina, 24 de mayo de 2024.
16. Lopreite, D., & Rodríguez Gustá, A. L. (2021). Feminismo de Estado en la Argentina democrática (1983-2021): ¿modelo aspiracional o realidad institucional? Revista SAAP, 15(2), 287-311. https://doi.org/10.46468/rsaap.15.2.A2
17. Roggeband, C. (2021). El retorno del Estado y la marea rosa en América Latina: implicaciones para la capacidad y la calidad democrática de los organismos de igualdad de género. Revista SAAP, 15(2), 257-286. https://doi.org/10.46468/rsaap.15.2.A1
18. Scott, J. W. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (Comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG-UNAM/Miguel Ángel Porrúa.
19. Secretaría de Gobernación. (2025). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres para el ejercicio fiscal 2025. Diario Oficial de la Federación, 28 de febrero de 2025.
20. Secretaría de las Mujeres. (2025a, 24 de febrero). Creación de la Secretaría de las Mujeres, reconocimiento a la desigualdad histórica. Gobierno de México.
21. Secretaría de las Mujeres. (2025b). Primer Informe de Labores 2024-2025. Gobierno de México.
22. Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Basil Blackwell.

Licencia
CC-By-NC-ND